



REFLEXIONES
MAURICIO GONZÁLEZ



Prueba de fuego

Este Gobierno ha abusado de las finanzas públicas. Entre 2012 y 2016 la deuda pública neta total aumentó 81 por ciento en tanto que la capacidad de pago de la misma —definida por la diferencia entre los ingresos totales y los gastos inevitables del Gobierno, incluyendo las pensiones de los empleados públicos y las participaciones a las entidades federativas— solamente lo hizo en 35 por ciento, o sea menos de la mitad del crecimiento de los pasivos gubernamentales.

Adicionalmente, la inversión pública total creció solamente 7 por ciento mientras que el resto del gasto de los programas de gobierno lo hizo en 34 por ciento, y las transferencias y subsidios, que forman parte del anterior, se elevaron 40 por ciento. En español sencillito, el gobierno gastó más de la cuenta, mucho en programas de dudoso beneficio y poco en servicios públicos, y como los ingresos no le alcanzaron para solventar sus gastos, hipotecó el futuro de los mexicanos.

Esa historia ha cambiado a partir de 2017. En los primeros cinco meses de este año el gasto público total se ha congelado con respecto a igual periodo del año anterior, lo que implica un descenso de aproximadamente 6 por ciento real debido al efecto de la inflación. A su vez, el gasto de los programas

que el gobierno controla ha descendido 12 por ciento real. Es un ajuste fuerte al gasto gubernamental e inédito en lo que va de esta administración.

Se ha reducido la nómina en 2.5 por ciento y los subsidios y las transferencias, refugio del dispendio, en casi 19 por ciento una vez restado el efecto de la inflación. El negrito de este arroz es que la inversión pública en infraestructura —la que se utiliza para que la población disfrute de los servicios públicos de transporte, energía eléctrica, agua, salud, educación y otros más a los que tiene derecho—, se ha disminuido en 28 por ciento real, o sea más que todo lo demás.

De hecho en los primeros cinco meses de este año el gobierno ha gastado en obra pública un monto similar al de subsidios y transferencias, algo cercano a 250 mil millones de pesos, lo que ameritaría una revisión para saber si efectivamente estos últimos están plenamente justificados en función de su costo y del beneficio que generan para ciertos núcleos de población.

El asunto es que la deuda pública prácticamente ha dejado de crecer, en contraste con el aumento de dos dígitos que observó, por ejemplo, el año pasado. Esta preocupación fundamental de seguir acrecentando los

pasivos gubernamentales orilló a las principales agencias calificadoras Moody's, Fitch y Standard & Poor's a ubicar a México en una perspectiva negativa, esto es, en la posibilidad de degradar la calificación de la deuda mexicana.

Esta última agencia acaba de mejorar la perspectiva de la deuda gubernamental de negativa a estable, lo que ciertamente es una buena noticia que ha influido positivamente en los mercados financieros. Es asimismo un reconocimiento que la SHCP ha tomado cartas en el asunto de controlar sus pasivos. Sin embargo la disminución real de la deuda pública ha obedecido más a la transferencia extraordinaria de utilidades que le hizo el Banco de México al gobierno en marzo pasado (340 mil millones de pesos), que al congelamiento del gasto público. Los dividendos de Banxico elevaron los ingresos del gobierno y le permitieron liquidar pasivos con estos recursos, una especie de lotería pues, como se ha comentado anteriormente en este espacio.

El reto para el año próximo está en que para seguir manteniendo a raya la deuda pública el gobierno tendría que volver a congelar su gasto en ausencia de una nueva lotería del Banco de México, ya que los otros ingresos públicos difícilmente se elevarán. Algo así no se ha observado nunca en un año de elecciones presidenciales. La duda podrá despejarse en pocas semanas cuando se presente el Paquete Económico de 2018. La SHCP ha mostrado la voluntad de corregir errores del pasado, pero esta será su prueba de fuego.

Socio de GEA Grupo
de economistas
y Asociados.